

Renán Fuentealba —ex presidente de la Democracia Cristiana (donde había sido sustituido por Patrio Aylwin), amigo personal de Allende y propicio al diálogo entre la UP y la DC— era también entrevistado. La entrevista aparecía titulada «No al golpe blanco» (expresión acuñada por Fuentealba), y esta fue una parte de ella:

«Ch. H.—Se ha dicho mucho, sin embargo, que la Democracia Cristiana, o un sector de ella, estaría dispuesta a apoyar un golpe militar que derrocar este Gobierno para provocar unas elecciones en que uno de sus candidatos resultara vencedor. ¿Qué opina usted de estas afirmaciones?»

«R. F.—Eso es falso. El partido tiene una tradición muy limpia, nítida y clara. Se le pueden hacer otras críticas, se puede estar en discordancia con él, pero de unas cosas no se le puede acusar: jamás ha sido golpista y jamás ha estado por derrocar Gobierno en este país. Y, por el contrario, siempre ha sido el primero en condenar o en oponerse a cualquier intento que signifique el derrocamiento de los Gobiernos legítimamente constituidos. No hay dentro de la Democracia Cristiana ni siquiera un sector que esté dispuesto a apoyar a los militares para derrocar al Gobier-

no. Además, personalmente, opino que eso es una tontería, porque creo que las circunstancias actuales de nuestro cuadro político hacen que quien se atreva a propiciar un golpe de esta naturaleza fracase, o en el golpe mismo o después, como Gobierno. Porque los problemas son de otro orden, y no se solucionan con Gobiernos fuertes ni con dictaduras de ninguna naturaleza. Aquí hay que incorporar realmente al pueblo al proceso de cambios, y, como digo, hay que conducir este proceso de una manera racional, desde el Gobierno, mediante una legislación adecuada que fije las reglas del juego».

Una semana más tarde podía leerse:

«Plan golpista en la Armada: En medio de indicios cada vez más claros del grado de hostilidad contra el Gobierno y la izquierda a que están llegando sectores de las Fuerzas Armadas, la Marina vive una gravísima situación, en que un grupo de marineros y suboficiales, acusados de subversión, son víctimas de brutal represión de parte de oficiales abiertamente sediciosos».

Pedro Enríquez, representante del Sindicato de Abogados en la Comisión de Derechos Humanos, creada en Concepción para investigar los hechos, declaró: «A nuestro

juicio, hay en este momento dentro de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, y en particular, en la Marina, una correlación de fuerzas desfavorables a la izquierda. Claramente, la gran mayoría de la oficialidad de esta rama de las Fuerzas Armadas es contraria al Gobierno y la izquierda. Pensamos que hay responsabilidad en la política que oficialmente se ha impulsado por parte del Gobierno hacia las Fuerzas Armadas, en que se las ha ubicado como instituciones asepticas desde el punto de vista de la lucha de clases, en circunstancias que con ello sólo se ha favorecido el desarrollo de sectores reaccionarios que han podido, con tranquilidad, ejecutar sus planes casi sin encontrar oposición».

## El golpe está vivo

El mes de agosto camina hacia su fin y «Ch. H.» escribe en un artículo editorial: «El acuerdo de la Cámara de Diputados (miércoles 22), afirmando que "el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta..."; la renuncia del general Carlos Prats (jueves 23) a su doble condición

de comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa y la crisis ministerial que ella acarrearó, fueron todos los hechos que demuestran que la política chilena vuelve a moverse fundamentalmente en la superestructura, en las negociaciones, acuerdos o rupturas entre la Moneda y el Congreso...».

Más adelante, bajo el título «La DC y el golpe», seguía: «Era la búsqueda, a ultranza, de situaciones insuperables para el Gobierno, que le obligaron a aceptar el "golpe blanco" que significaría la incorporación de militares a esos "mandos medios" tan caros (literalmente) para Frei, o el otro golpe, el negro, fascista, y dado a sangre y fuego...».

Y luego habla de la detención de Roberto Thieme, dirigente del movimiento Patria y Libertad:

«El 16 de julio, Thieme reapareció en Santiago, ofreciendo una conferencia de prensa en el restaurante Bremen, de Las Condes. Anunció que asumía la jefatura del "movimiento" después que Pablo Rodríguez y otros cinco fascistas comprometidos en el frustrado golpe cívico-militar del 29 de junio huyeron a Ecuador, y que a partir de ese instante, Patria y Libertad pasaba a la clandestinidad para "iniciar las acciones de inmediato"... Desde ese día, hasta la madrugada del 26 de agosto, una sangrienta ola terrorista sacudió a todo el país...». Paralelamente, el jefe fascista sostuvo diversas reuniones con oficiales de mediana y alta graduación. (...) Thieme insistía en que la derecha política y económica nada definitivo podía hacer contra el Gobierno Popular sin que los uniformados se decidieran a apoyarlo en sus proyectos sediciosos...». Posteriormente, Thieme citaría a la prensa en un elegante restaurante, frente a una «opípara cena, compartida con cuatro muchachas y otros cinco amigos». Allí fue detenido el que la izquierda llamaba «"play-boy" sanguinario» y llevado más tarde a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde dijo: «En la lucha, alguien tiene que morir», cuando se le planteó que debido a sus órdenes habían fallecido ocho personas. Entró a la cárcel convencido de que el golpe y la guerra civil ya no los detiene nadie, y que pronto recuperará la libertad para recibir los homenajes de la «democracia» agradecida.

«Fuerza Aérea: El golpe está vivo», decía el semanario al referirse a este sector de las Fuerzas Armadas.

«Los mandos reaccionarios de la aviación han estado haciendo esfuerzos permanentes por mantener contactos con colegas de las otras dos ramas, para procurar una participación "de apoyo" en un golpe. (...) Cuando fracasó el golpe de Souper, cambió la estrategia golpista en la Fuerza Aérea. Ya no se trataba de apoyar un golpe ajeno, sino de convertirse en factores clave del emplazamiento al Presidente. (...) La intencionalidad de Roberto Souper sirvió de experiencia y

**L** a democracia cristiana es una conquista de todo el pueblo. No es ni la obra ni un regalo de las clases explotadoras y será defendida por quien, gracias a los sacrificios de varias generaciones, han logrado imponerla.

«Con la conciencia tranquila y midiendo mi responsabilidad frente a las generaciones presentes y futuras, sostengo que nunca ha habido en Chile un gobierno más democrático que el que yo tengo el honor de presidir, un gobierno que haya hecho más en pro de la defensa de la independencia económica y política del país, en pro de la liberación social de los trabajadores. El gobierno ha respetado las leyes en todo momento y se ha comprometido en la tarea de llevar a efecto una serie de transformaciones revolucionarias en nuestras estructuras económicas y sociales.

«Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el estado de derecho hasta sus últimas consecuencias. Y como dije el 2 de agosto pasado en carta dirigida al presidente del partido demócrata cristiano, "la fuerza de nuestro régimen institucional se basa en la robustez de las instituciones".

«El Parlamento se ha erigido en baluarte contra las transformaciones y ha hecho todo lo que ha podido a fin de perturbar el buen funcionamiento de las finanzas y de las instituciones, esterilizando de ese modo toda iniciativa creadora. La mayoría de la Cámara de Diputados, al silenciar toda condena del terrorismo reinante, protege y apoya de hecho al Parlamento. Así, los parlamentarios de la oposición facilitan la sedición de quienes quisieran inmolarse a los trabajadores que luchan por su plena libertad económica y política.

«Por eso, me permito acusar a la oposición de tratar de impedir el desarrollo histórico de nuestra legalidad democrática, que la elevaría a un nivel más auténtico y más alto. Tras la expresión "estado de derecho", a la que la oposición hace referencia, se oculta en realidad una situación que supone, entre los chilenos, una injusticia económica y social que nuestro pueblo ha rechazado. Los parlamentarios de la oposición pretenden ignorar que el estado de derecho se realiza plenamente sólo en la medida en que se superan las desigualdades propias de una sociedad capitalista.

«Con sus acciones, la reacción chilena descubre

## UNA RESPUESTA HISTORICA DE ALLENDE AL CONGRESO

al país entero y al mundo los intereses egoístas que trata de defender.

«Las medidas económicas y políticas que necesita nuestro país para superar la crisis total a la que tratamos de arrastrarnos, son importantísimas y gravísimas. El gobierno adoptará tales medidas a despecho de los obstáculos que le coloquen en su camino, y para ello solicita la colaboración de los sectores democráticos de la oposición.

«Pero cuando a la parálisis de las instituciones, impuesta por el Congreso, se suma el intento de destruir al propio Estado, cuando la formidable ofensiva que se ha desencadenado atenta directamente a la democracia y al régimen de derecho, mi deber patriótico me obliga a asumir y utilizar los plenos poderes políticos y administrativos que me otorga la Constitución en mi calidad de jefe supremo de la nación.

«Cada ataque, cada paso dado por la reacción en su deseo de destruir las vidas, los bienes materiales, las instituciones cívicas y militares, obra valerosa de decenios de historia, me ratifican en mi propósito, acrecientan mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos mismos y para la patria.

«Hoy, cuando la reacción ataca frontalmente la razón del derecho y la amenaza de muerte a las libertades, cuando los trabajadores reivindican con insistencia una nueva sociedad, los chilenos pueden estar seguros de que el Presidente de la República, unido al pueblo, cumplirá con su deber sin vacilaciones a fin de garantizar la plena realidad de la democracia y de las libertades en el proceso revolucionario. Para que colaboren en tan noble tarea, lanzo desde aquí un llamamiento a todos los demócratas y todos los patriotas de Chile». ■

(Texto de la declaración del Presidente chileno como respuesta al acuerdo sobre la «legalidad» del gobierno, aprobado por la mayoría opositora del Congreso a finales de agosto.)